

## ECONOMÍA



la oposición pide responsabilidades a Núñez Feijóo por los incendios que han arrasado 35.000 hectáreas

Desde que comenzara la crisis económica en 2008 el gasto público en prevención y extinción de incendios forestales ha disminuido en la gran mayoría de las administraciones. En muchos casos, de forma drástica. Destacan los recortes próximos al 40% en Aragón y en Asturias y del 30%

en Castilla y León. Pero lo más grave para los expertos es que las Administraciones reservan de media más del 80% de las inversiones a extinción, frente a apenas un 20% destinado a prevención "con lo que se subestima la posibilidad de recuperar o dinamizar los usos del monte".

**Recortes en prevención de hasta el 40% y del 10% en extinción dan alas al fuego que ha arrasado más de 105.000 hectáreas en lo que va de año**

## Las CC AA se 'queman' con su política antiincendios

■ Ana Sánchez Arjona

Las 35.500 hectáreas quemadas en Galicia en la ola reciente de incendios avanzan el peor balance desde 2006. Esto supone, casi un 70% más que en todo el año pasado. En apenas dos días, el fuego se ha llevado por delante prácticamente la mitad de lo quemado en la gran ola de incendios de hace diez años, que duró dos semanas. Las primeras estimaciones de la superficie arrasada por las llamas muestran con claridad la magnitud de la catástrofe y permiten asegurar que el balance de los incendios de 2017 será el más alto de una década, el peor desde el año 2006, en el que la gran crisis de los fuegos de agosto había convertido aquel ejercicio en el peor en veinte años.

La cifra de 105.679 hectáreas arrasadas por el fuego hasta octubre también sorprende porque se acercan al peor segundo registro de 117.220 del año 2009, aunque, por suerte, quedan muy lejos de las 215.669 del histórico 2012.

Asegura en un documento que acaba de publicar la **Federación de Servicios de UGT** que "hasta ahora, las comunidades autónomas han sido capaces de contener, a duras penas y a pesar de los recortes, las emergencias por incendios forestales, para que los sucesos no superen las capacidades operativas de sus territorios, como ya pasara en los años 2005, 2006 en Galicia, 2009, o 2012, pero actualmente, las simultaneidades de incendios en una determinada región, provoca la petición continuada de ayuda estatal o extracomunitaria".

En los últimos cinco años las comunidades han recortado las partidas destinadas a la prevención de incendios de media un 20% que en algunos casos ha llegado a ser del 40%. El informe denuncia la "falta de sensibilidad medioambiental y forestal de los gobiernos autonómicos" al escatimar los recursos para la conservación del entorno, la prevención

y la extinción de los incendios.

También el sindicato **CCOO** insiste en que la reducción presupuestaria, unida al "empeoramiento de las causas estructurales y climáticas que hacen que se desencadenen" los fuegos, aumenta el riesgo de incendios forestales. Recuerda que los años previos a la crisis casi todas las administraciones autonómicas incrementaron los medios humanos y materiales para la extinción de incendios forestales, al tiempo que mejoraban la estabilidad y las condiciones de trabajo en el sector. Sin embargo, ahora "el trabajo forestal no está bien remunerado, apenas tiene convenios colectivos realmente activos, es muy temporal, está muy masculinizado, con poca cualificación, escasa formación y es de especial riesgo.

A pesar de la magnitud del proble-

ma, una gran parte de las administraciones del Estado que son competentes en combatir los incendios forestales no es transparente a la hora de cumplir la ley vigente y publicar los datos de presupuestos y gastos. "El análisis de los datos obtenidos", explica el sindicato, permite demostrar que desde que comenzó la crisis económica en 2008 el gasto públi-

**Aunque a día de hoy el presupuesto destinado a la prevención se está recuperando, no es ni mucho menos suficiente para paliar los efectos de los recortes aplicados durante los peores años de la crisis**

co en prevención y extinción de incendios forestales ha disminuido en la gran mayoría de las administraciones competentes. En muchos casos, de forma drástica.

Y aunque a día de hoy el presupuesto destinado a la prevención se está recuperando, no es ni mucho menos suficiente para paliar los efectos de los recortes aplicados durante los peores años de la crisis. Por ejemplo, en el capítulo de prevención destacan los recortes próximos al 40% en **Aragón** (de 18,1 millones de euros a 9,4), **Asturias** (de 15,2 millones a 8,5) o en **Castilla y León** (de 58,1 millones a 30,6).

En términos absolutos, la caída en el presupuesto más llamativa es la de **Andalucía**, que de 132,6 millones de euros en 2006 pasaba a los 101,6 presupuestados en 2015; y el de Castilla y León, que redujo su

inversión en prevención en 30 millones entre lo invertido en 2008 y la partida de 2014. Los presupuestos públicos en extinción de incendios también se han visto mermados aunque ha sido mucho menos drástico que en materia de prevención. Lo hemos visto en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, **Extremadura**, **La Rioja**, **Murcia** o el cabildo de **Gran Canaria**. En Andalucía, por ejemplo, se presupuestaron 88 millones de euros en 2006, mientras que en 2015 son sólo 76.

### Subestimar la prevención

En el caso reciente de Galicia, la Administración de **Núñez Feijóo** invierte 174 millones de euros en 2017 convierten a Galicia en uno de los territorios que más dinero invierte en la extinción de incendios. Pero, se preguntan los expertos, ¿dónde está la prevención y el cuidado de los montes?

La **Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza** (WWF) en su estudio "Dónde arden los bosques" señala que las administraciones reservan de media más del 80% de las inversiones a extinción, frente a apenas un 20% destinado a prevención. Por tanto, se subestima en general la posibilidad de recuperar o dinamizar usos del monte, que contribuirían a generar empleo y a prevenir que ocurran incendios a largo plazo.

El pasado 20 de junio el **Ministerio de Agricultura** presentó la campaña de prevención de incendios para este año que cuenta con un presupuesto de 85 millones de euros, nueve millones más que el año anterior, con 70 medios aéreos y unos 1.000 efectivos de personal. Además, contará con la novedad de cuatro drones que se encargarán de la vigilancia y seguimiento de los incendios.

Sin embargo y a pesar de que si bien se ha aumentado la inversión desde la Administración Central, "el Gobierno sólo se encarga de labores de coordinación y apoyo por lo que desde los gobiernos autonómicos se ha realizado un fuerte recorte en materia de prevención, gestión y extinción desde la crisis, por lo que invierte muy poco en el monte". Por tanto, es necesario señalar que la gran labor recae en las Comunidades Autónomas a la hora de extinguir un incendio que pueden solicitar a la Administración Central ayuda o apoyo.

Otro de los factores que se cuestiona es, según los expertos, la politización de la **Ley de Montes** ya que "una mentira cien veces repetida no se convierte en verdad y ningún suceso que haya sido devastado por un incendio se ha convertido en urbanizable, de momento, ya que se necesita un interés general y ser aprobado por ley, lo que sería bastante complicado que saliese adelante".

Recordemos que la Ley de Montes señala que se mantiene que queda prohibido "el cambio de uso forestal al menos durante 30 años" tras un incendio y no se cambian tres excepciones de la Ley 43/2003 aunque si se introduce una salvada nueva: "con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurren razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal". Aun así, los expertos destacan que la realidad de los datos nos dice que sólo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo.

## Una década de incendios, un pirómano en la cárcel

■ El pirómano, aquí que tiene una tendencia patológica a la provocación de incendios, es el 'enemigo número uno' de los bosques de entre los seres humanos, junto al ciudadano imprudente. Y como tal, el Código Penal español prevé sanciones y penas de cárcel para estos que, por distintas razones, deciden prender un pequeño fuego que acaba convirtiéndose en una tragedia.

El Código Penal se modificó en 2015 para endurecer las penas. Un efecto que pareció disuasorio en el 2016 pero que ha vuelto a ser

un problema en este año en el que se alcanzan cifras récord. Aunque el nuevo texto mantiene el tipo básico vigente hasta ahora, penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 18 meses, en los supuestos agravados se prevé una sanción autonómica. De esta forma, quienes provoquen el incendio serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses, cuando el incendio alcance especial gravedad y concurren las circunstancias establecidas en el Código. Además, en los casos con peligro para

la vida de las personas la sanción puede alcanzar los 20 años. Si el incendio afecta a una gran superficie o provoca graves consecuencias, las penas serán de tres a seis años con multa de hasta dos años. Con la misma penalización se tratan los casos en los que el motivo sea obtener beneficios económicos. En este sentido, Greenpeace ha ofrecido datos preocupantes al poner sobre la mesa que en los últimos 10 años solo ha habido una sentencia condenatoria por este tipo de delitos en Canarias. En España son 40 desde 1994, una

cifra que la organización ecologista juzga de "ridícula". Menos del 5% de los incendiarios detenidos, agrega, cumple penas de cárcel. Para la organización, los cambios legales deberían permitir que a los incendiarios reincidentes se les pudiera confinar o permanecer bajo absoluta vigilancia durante la época estival. Greenpeace advierte de que "o se acaba con la sensación de impunidad, o los incendios intencionados y negligentes seguirán sumando hectáreas quemadas".